
OIM PROGRAMA RPR

GACETA DE LA PAZ

Del 19 al 25 de septiembre 2018

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el impasse que ensombrece las negociaciones de paz con el ELN; las declaraciones del gobierno alertando sobre la falta de recursos para implementar el Acuerdo de Paz; la intensificación de la violencia en el bajo cauca antioqueño y su afectación de la restitución de tierras; el asesinato de 3 geólogos que realizaban exploraciones para la Continental Gold en Yarumal, Antioquia; entre otros.

Sin un acuerdo, no habrá sometimiento a la ley: ELN

Este lunes, el ELN aseguró que, sin acuerdos con el Gobierno para reiniciar los diálogos de paz en La Habana, no está obligada a cumplir con la ley. Por otro lado, manifestaron que esperan que el presidente Iván Duque nombre pronto un nuevo equipo negociador para determinar los pactos dentro del proceso. "El ELN es una fuerza insurgente y no está obligada a cumplir la legalidad del Estado colombiano, hasta tanto no haya un acuerdo de superación definitiva del conflicto, donde las dos partes se sientan satisfechas con lo acordado", dijo la organización.¹ Los diálogos, iniciados durante el segundo cuatrienio de Santos, están pausadas desde agosto por el nuevo presidente, quien para reanudarlas exige a la guerrilla que cese todas las actividades criminales y libere a todos los secuestrados. Hace unos días el ELN liberó a nueve rehenes, entre militares, policías y civiles, asimismo también liberó a una menor de edad a la que había plagiado porque lo consideraban como un informante de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Duque formalizó esta última semana el retiro de los negociadores de paz designados por el gobierno anterior y dijo que no habrá un nuevo equipo hasta que no vean avances suficientes del grupo armado para retomar el diálogo.²

No hay recursos para implementar el Acuerdo de Paz

El presidente Duque le encargó a Emilio Archila ser la cabeza de la implementación del Acuerdo Final firmado con la exguerrilla de las FARC. La entidad que dirige — antes llamada Ministerio para el Posconflicto, hoy Alta Consejería para la Estabilización— debe coordinar a todas entidades del Estado que tienen algún tipo de participación en el cumplimiento de lo acordado. Él insiste en que no hay recursos para esa implementación y el Gobierno aún no tiene una fórmula para cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado. "El número de frentes que tiene la implementación es inmenso, son muchas variables [...] Tenemos unas responsabilidades en el corto plazo, seguir manteniendo lo que necesitan para mantener la confianza y al mismo tiempo seguir mirando temas de fondo", afirmó Archila.³ Por su parte, en su segundo informe enviado al Congreso, la Contraloría asegura que aunque el Ministerio de Hacienda ha presupuestado que la implementación del acuerdo final con las FARC costará en los próximos 15 años unos 129,5 billones de pesos, este ejercicio "resulta insuficiente para alcanzar los objetivos contemplados en el acuerdo final".⁴

Confrontación armada afecta restitución de tierras en el Bajo Cauca antioqueño⁵

Los choques que sostienen desde finales del año pasado los 'Caparrapos', conocidos también como 'Frente Virgilio Peralta', y las denominadas 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)', incrementaron los homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y demás conductas violatorias de los derechos humanos en municipios como Tarazá, Cáceres y Caucasia, en Antioquia, y San José de Uré, Córdoba. La inseguridad que genera esa disputa armada en la región está impactando los procesos de restitución de tierras despojadas debido al conflicto armado por cuanto los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no pueden llegar a los predios reclamados por las víctimas para adelantar los procedimientos requeridos. Por cuenta de esa fuerte alteración de orden público se suspendieron las labores de documentación de por lo menos 200 solicitudes de restitución de tierras en Cáceres; y en Caucasia, Tarazá y San José de Uré, las labores avanzan según lo permitan las condiciones de seguridad.

Asesinato de 3 geólogos en Yarumal, Antioquia enciende alarmas

Eran las dos de la mañana del 19 de septiembre cuando los asesinos llegaron hasta una vivienda en el corregimiento Ochalí del municipio de Yarumal, Antioquia. Sin mediar palabra desfundaron sus armas y las descargaron contra quienes se encontraban durmiendo en el lugar. El ataque causó la muerte de los geólogos Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez, que hacían exploraciones para la multinacional canadiense Continental Gold. En el atentado también quedaron heridos cuatro trabajadores de la empresa.⁶ Las autoridades sindicaron del ataque a 'Cabuyo', un disidente de la otrora guerrilla de las FARC que se apartó del proceso de paz y que ahora busca controlar los cultivos ilícitos y la explotación de oro que se adelanta de manera ilegal en la región.⁷ En Yarumal la pelea no sería entre grupos ilegales, como sí pasa en zonas cocaleras en Ituango, Valdivia y Tarazá, más hacia Córdoba; sino por la defensa de lo ilegal contra cualquier signo que implique la llegada de la legalidad y el Estado.⁸ En este sentido el asesinato de los tres geólogos sería apenas el comienzo de la campaña de muerte declarada en las zonas donde esta multinacional busca oro.⁹

OIM PROGRAMA RPR GACETA DE LA PAZ

Del 19 al 25 de septiembre 2018

Durante el gobierno Santos fueron asesinados 609 líderes sociales

Cada dos días, un líder social y/o defensor de derechos humanos es amenazado, desplazado o asesinado, según el último informe de Somos Defensores, la organización no gubernamental que desde hace más de una década documenta estas agresiones en Colombia. Una de las cifras reveladoras del informe es la que se registró durante los ocho años del Gobierno de Santos, desde 2010 hasta junio de 2018 fueron asesinados 609 líderes sociales, se registraron 2.646 amenazas y 328 atentados contra esta población. De hecho, según lo muestra la curva de agresiones, después de iniciados los diálogos de paz los homicidios se incrementaron y, en mayor proporción, después de la firma del acuerdo.¹⁰ La impunidad que rodea la gran mayoría de casos y la ausencia de una estrategia que permita mitigar lo que viene pasando, les está dando alas al fenómeno en el país. Del total de casos reportados hace casi una década, en el 91,4 por ciento de ellos no se ha hecho justicia; la impunidad es muy alta, solo 48 sentencias de más de 600 líderes asesinados.¹¹ Para Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, esas escalofriantes cifras también son el reflejo de la transición y del cambio de tono que emergió durante el gobierno del anterior presidente, ya que, en periodos anteriores, esta clase de hechos no se denunciaban con fuerza y se estima que el subregistro de casos puede ser del 90 por ciento.¹²

Desaparecidos en Colombia podrían ser el doble de los registrados por el CNMH¹³

Fundado en 2004, el Equipo Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) ha combinado los conocimientos de diferentes ramas del saber para ayudar a víctimas del conflicto armado a obtener verdad, justicia y reparación. Uno de sus puntos fuertes es la búsqueda de personas desaparecidas, por medio del cual ha ayudado en la construcción de los perfiles de las víctimas y en la potencial ubicación de donde fueron desaparecidos. Esa experiencia llevó a que el Consejo Económico de la ONU le otorgara Estatus Consultivo Especial, con lo que podrá relacionarse con todos los organismos de ese sistema multilateral y suministrarles informes. Diana Arango, su directora desde 2015, estima que según las proyecciones que arrojan las investigaciones de Equitas, los casos en el país podrían ser el doble de los 82.998 registrados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1958 y 2017. "Creo que las cifras que presenta el Centro de Nacional de Memoria Histórica, de 83 mil, son bajas, con subregistro. Creo que en Colombia podemos estar llegando al doble de eso", aseveró Arango.

Arauca: entre un paro cívico y un posible paro armado¹⁴

En Saravena, durante la semana pasada hombres desconocidos se han acercado a varios establecimientos comerciales increpando a los dueños por "cerrar tan tarde".

Esto ha estado acompañado de la instalación de vallas por parte del ELN, en las que se prohíbe el uso de cascos a los motociclistas que transiten por la vía entre Fortul y Tame en horas de la noche. Según fuentes de la zona, estos dos eventos estarían conectados en lo que podría ser una nueva declaración de paro armado. Además, en Arauca se escucha sobre la vuelta de grupos paramilitares a la región, quienes al parecer estarían ingresando por Casanare. Sumado a esto, fuentes del departamento indican que algunos desmovilizados de las extintas FARC estarían siendo reclutados por un grupo post FARC que hace un par de meses tiene presencia entre Tame y Saravena. Al parecer, este grupo habría llegado a un acuerdo de connivencia con el ELN para operar en las zonas anteriormente controladas por la extinta guerrilla. Incluso, existen testimonios desde la institucionalidad que hablan de reclutamientos de excombatientes por parte del ELN, especialmente dirigidos a los antiguos cuadros militares ex FARC. Con tal panorama, se declaró por parte de distintas organizaciones sociales en Arauca un paro cívico indefinido en cabeza del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos. En un comunicado argumentaron falta de inversión y de seguridad en lo que atañe a la lucha social.

La coca llegó a su máximo histórico, pero está creciendo más lento¹⁵

La UNODC dijo que el año pasado se sembraron 171 mil hectáreas de coca en el país, la cifra más alta desde 1999, fecha en que se empezó a medirlas. No es una cifra tan alarmante como las 209 mil que contó la Casa Blanca para ese mismo año, es usual que la cifra de la UNODC sea menor y más precisa, porque usa imágenes satelitales para medir todo el territorio. Pero, lo grave es que crecieron justo cuando el Gobierno puso en marcha el programa de sustitución de cultivos, lo que demuestra que el vacío que dejó la exguerrilla lo llenaron otros. La buena noticia es que el aumento no es una disparada como la del año anterior, es decir, siguen creciendo los sembrados, pero no tan rápido. Otras conclusiones del informe indican que: los actores armados post FARC están donde la coca está creciendo o en lugares donde hay mucha coca pero está creciendo poco o nada; se verifica un "efecto globo" en las zonas con más coca, o sea una dinámica donde los siembras se mudan a municipios vecinos como consecuencia de la erradicación, pero no desaparecen; además, se reclama una mayor atención al Nudo de Paramillo, nueva zona cocalera donde hay disputas entre Disidencias, ELN y el Clan del Golfo.

Fuentes

El Espectador disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias>

Verdad Abierta disponible en: <https://verdadabierta.com/>

La Silla Vacía disponible en: <http://lasillavacia.com/>

Fundación Paz y Reconciliación: <http://pares.com.co/>

El Tiempo disponible en: <https://www.eltiempo.com/>

Semana disponible en: <https://www.semana.com/>

Las 2 Orillas disponible en: <https://www.las2orillas.co/>